

Amenazas en establecimientos de Biobío obligan a recuperar clases y reactivan debate sobre convivencia escolar

Jorge Monares Olivares
prensa@latribuna.cl

Se mantiene la preocupación de las autoridades por las amenazas de tiroteo hacia comunidades educativas en la provincia de Biobío, en un escenario donde se ha reiterado el reproche frente a un fenómeno que, por ahora, no muestra señales de disminuir.

Las alertas registradas en los últimos días han obligado a suspender clases, activar protocolos de seguridad y desplegar operativos preventivos en distintos establecimientos, generando un clima de inquietud entre estudiantes, docentes y apoderados.

En ese contexto, desde el ámbito educacional también se ha reforzado el mensaje hacia las comunidades estudiantiles, señalando que cada jornada de suspensión de clases derivada de este tipo de situaciones deberá ser recuperada con el fin de resguardar el cumplimiento del calendario escolar y evitar rezagos en los procesos formativos.

En medio de este escenario, desde el Ministerio Público advirtieron que actualmente no existe una cifra consolidada de denuncias asociadas a amenazas en recintos educacionales, lo que complejiza dimensionar con precisión la magnitud del fenómeno.

Según explicaron, el sistema de registro no permite identificar directamente estos casos en relación con el contexto en que ocurren —como colegios o universidades—, ya que se clasifican conforme al tipo penal general. Esto implica que las denuncias pueden ingresar como amenazas, pero también bajo otras categorías como “otros hechos” o “daños”, dificultando su sistematización específica.

En ese sentido, precisaron que para obtener datos más exactos sería necesario realizar una revisión caso a caso o aplicar filtros más específicos, lo que actualmente no forma parte de los reportes estándar disponibles. Esta limitación, indicaron, obliga a las instituciones a analizar los antecedentes de manera más detallada para comprender el alcance real de estas situaciones.

Las autoridades instan a reforzar la convivencia y la responsabilidad colectiva frente a estos hechos, advirtiendo además que todas las clases suspendidas deberán ser recuperadas conforme al calendario escolar.



POR EL MOMENTO, no existe un número oficial de denuncias por amenazas hacia comunidades estudiantiles de la provincia.

NUEVAS REACCIONES

Frente a la realidad que se está viviendo, el concejal de Los Ángeles, Daniel Badilla, integrante de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal, manifestó preocupación. “Efectivamente, es muy grave lo que está pasando a nivel nacional y sobre todo en nuestra ciudad. No podemos permitir que estén haciendo amenazas, escribiendo temas de tiroteo”, afirmó la autoridad comunal.

En esa línea, llamó a reforzar las medidas de seguridad en los recintos educativos, incluso con acciones más estrictas. “Tenemos que tomar todos los resguardos del caso, inclusive colocar detectores de metales. Toda medida que proteja a nuestros alumnos, profesores y para docentes es bienvenida”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que no se debe tolerar ningún tipo de violencia. “No podemos permitir que en los colegios haya violencia, no podemos permitir que anden personas armadas con cuchillos o pistolas. A esos delinquentes hay que atacarlos como corresponde”, indicó.

El concejal también hizo un llamado a mantener una postura

clara frente a la delincuencia. “No podemos andar con dobles discursos. Aquí tenemos que tomar una sola medida. Tenemos que tomar una posición firme al respecto”, señaló.

Además, propuso sanciones drásticas frente a estos hechos. “Mi posición es clara: persona o alumno que llegue con un arma tiene que ser expulsado del colegio. Los alumnos van a estudiar y los padres confían en que sus hijos están seguros. Esa es una medida firme que voy a plantear en el próximo concejo”, agregó.

MENSAJE DE PREVENCIÓN

A estas declaraciones se sumó el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, quien por segundo día consecutivo abordó la situación tras una semana especialmente marcada por este tipo de alertas en distintos establecimientos.

“Es preocupante. Yo creo que los jóvenes y los alumnos no le han tomado el peso a lo que están haciendo”, señaló.

La autoridad detalló que ya se están adoptando acciones coordinadas entre distintos organismos públicos. “El martes

nosotros iniciamos aquí, en la Delegación, una mesa de seguridad en relación con este tema, en relación a los recintos escolares, donde vino la seremi de Educación, estuvieron las policías, estuvo el municipio, estuvieron todos los entes presentes que se tienen que involucrar en esto. Las medidas tienen que ser severas, porque la verdad las cosas que hoy día ya, este juego, por llamarlo de alguna manera, en la forma que lo ven algunos estudiantes, está tomando otro ribete”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre el impacto que estas situaciones generan en las comunidades. “Más allá del costo financiero que pudiesen tener los mismos establecimientos escolares suspendiendo las clases, existen también costos familiares, que nos preocupa a todas las comunas que se han presentado este tipo de hechos”, indicó.

Finalmente, confirmó que se trabaja en mejorar los protocolos de acción. “Se está trabajando en eso para tener un protocolo más unificado en todos los recintos escolares, desarrollándolo con ellos, con los DAEM y junto con la seremi de Educación”, explicó.

CARABINEROS FRENTE A ESTOS HECHOS

Desde Carabineros, el coronel Emerson Carrasco, prefecto Carabineros en la provincia de Biobío, detalló el accionar policial frente a estos casos, diferenciando entre hechos consumados y amenazas que no llegan a concretarse.

“Mire, después de todo lo que está pasando a nivel nacional con estas amenazas (...) nosotros actuamos de dos formas. La primera es que cuando están estos delitos flagrantes, obviamente se procede a la detención de los involucrados y después se da cuenta al Ministerio Público. Y lo otro también (...) son las amenazas que se generan a través de rayados, por ejemplo, en los baños, donde se manifiestan posibles agresiones al interior del colegio”, explicó.

El oficial agregó que existe coordinación directa con los establecimientos más afectados. “Tenemos contactos prioritarios con aquellos colegios donde hay hechos de violencia (...) se ha logrado la detención de algunos y también se realizan charlas con alumnos para mejorar la resolución de conflictos”, indicó.

Respecto a la posibilidad de resguardo permanente, Carrasco reconoció limitaciones operativas. “Es muy complejo, considerando que en Los Ángeles hay cerca de 190 colegios. Pero en aquellos donde han ocurrido hechos más graves existe un contacto permanente y rondas periódicas”, señaló, agregando que en muchos casos las amenazas buscan generar suspensión de clases como objetivo.

Este escenario ha tenido efectos concretos en el funcionamiento de los establecimientos educacionales de la provincia, donde equipos directivos han debido activar protocolos de emergencia, coordinar evacuaciones preventivas y reforzar medidas internas de seguridad.

A ello se suma el impacto en la comunidad educativa, donde estudiantes y docentes enfrentan jornadas marcadas por la incertidumbre, mientras apoderados expresan preocupación por la seguridad en los recintos.